



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2
CPE 832/2015/TO1/4

///nos Aires, 22 de febrero de 2023.-

AUTOS Y VISTOS:

I.- Que, conforme lo ordenado con fecha 06 del corriente, se han corrido vistas a la querella y al Sr. Fiscal General interino respecto a la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio (art. 59 inc. 6° del CP). En el mismo sentido, la defensa del imputado ESMEDE se había ya pronunciado acerca de su procedencia (escrito del 08 de este mes).

II.- Que la querella AFIP DGI sostuvo que tal extinción no procedía, conforme los argumentos dados el día 13 ppdo..

III.- Que, por el contrario, el Sr. Fiscal General de Juicio interino estimó que cabía en el caso extinguir la acción por la reparación integral del perjuicio (presentación del 14 de este mes).

IV.- Que, de acuerdo con lo decidido por el Tribunal en la citada decisión del 06 del corriente mes, se suspendió el proceso hasta tanto el imputado ESMEDE procediera al cumplimiento de la donación allí ordenada. Con fecha 08 del corriente mes el nombrado procedió a realizar la misma, por lo cual el presente incidente quedó en condiciones de ser resuelto (conf. presentación de esa misma fecha).

V.- Que, en la referida del Tribunal decisión se dieron los fundamentos por los cuales se entendió que era procedente la aplicación de lo normado por el art. 59 inc. 6° del CP, a los cuales se remite en razón de brevedad.

VI.- Que la querella AFIP/DGI, en su presentación del 13 de este mes, consideró nuevamente que la referida causal de



extinción de la acción penal no era de aplicación a los delitos de la ley n° 24.769 por poseer esta última normativa un régimen de extinción propio por pago (art. 16). El Sr. Fiscal General de Juicio estimó que, más allá de tal régimen, en el caso el art. 59 inc. 6° del CP era aplicable. Cabe señalar que la conducta imputada al nombrado ESMEDE actualmente vigente fue calificada en los términos del art. 9 de la ley n° 24.769 (conf. requerimiento de elevación a juicio).

VII.- Que las partes no han objetado la operabilidad del art. 59 inc. 6° del CP en lo referente a la extinción de la acción penal por la reparación integral del perjuicio, más allá de su falta de reglamentación. El Tribunal, como se recordará, también estimó directamente operativa tal causal (decisión del 06/02/23) a la cual se remite.

VIII.- Que lo que nuevamente se discute es la procedencia de la misma respecto a los delitos de la ley n° 24.769 atento el régimen especial de extinción por pago que poseía (art. 16). En ese sentido, también el Tribunal se hubo expedido favorablemente en la citada resolución. El Ministerio Público, tanto en la audiencia del 03/06/22 como en la nueva presentación del 14 de este mes, por sus fundamentos, consideró asimismo aplicable en el caso tal causal.

IX.- Que, en la medida que las críticas de la querella al respecto resultan ser reiteración de lo dicho en la citada audiencia del 03/06/22, se habrá de remitir a lo sostenido en la resolución del 06 del corriente. Nuevamente cabe remarcar que el régimen general del art. 59 inc. 6° del CP resulta aplicable a los delitos tributarios o previsionales de la ley n° 24.749 en tanto el legislador no lo ha prohibido en forma expresa, como sí lo hizo al restringir a tales delitos la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis in fine del CP agregado por la ley n° 26.785). Más allá de los supuestos que específicamente abarcan los arts. 16 de las leyes 24.769 y 27.430





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2
CPE 832/2015/TO1/4

del vigente régimen penal tributario, la extinción general por reparación integral del perjuicio del art. 59 inc. 6° del CP resulta aplicable, como en el presente caso, a todas las otras hipótesis atento su ausencia de prohibición expresa. En otras palabras, la ley especial n° 24.749 (art. 16) no priva sobre la general (art. 59 inc. 6° del CP) por no disponer lo contrario fuera de los supuestos que concretamente refiere (art. 4 íd.). Una disposición en contrario de la ley especial, para privar sobre la general, tiene que ser expresa, como en el caso del art. 871 del CA al consagrar un régimen distinto sobre la pena aplicable al delito tentado (art. 44 del CP) o el art. 20 de la ley n° 19.359 que vedaba vgr. la aplicación de la ley más benigna referida en el art. 2 del CP.

X.- Que, en lo relativo a los rubros que integran la reparación integral del perjuicio en el caso concreto también se remite a lo dicho al efecto en la decisión del 06 del corriente y criterio concordante del Sr. Fiscal General. Ello así, pues los argumentos de la querella en contrario no responden a lo sostenido en tal sentido. Por lo demás, no media entredicho entre las partes respecto al pago del imputado a la AFIP/DGI de la suma de pesos ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos nueve con veintisiete centavos (\$ 165.409,27) correspondiente al monto e intereses aprobado por el propio organismo recaudador en orden al hecho resultante de la omisión en el mes de diciembre de 2012 por parte de la firma “Vida Verde SRL.” de no abonar los aportes respectivos retenidos. Ello se suma, dentro de lo integral de la reparación exigida, como bien lo sostuvo el Sr. Fiscal, a la donación efectuada a una institución de bien público. Esto último atiende, como lo sostuvo la CSJN, al marco jurídico general de amplio y reconocido contenido social de las normas fiscales (Fallos 314:1376 considerando 9° entre otros).

XI.- Que el argumento dado por la querella respecto a que la reparación integral del perjuicio en delitos fiscales



no se agota con la mera satisfacción del daño económico se halla en pugna con lo que el propio legislador hubo dispuesto en los reiterados regímenes de regularización de deudas tributarias sujetas a proceso penal donde el pago incondicional de la deuda también extinguía la respectiva acción penal (por todos, art. 10 de la ley n° 27.541). De ser coherente con ello, como lo señalara el Sr. Fiscal, tampoco cabría su aplicación por el régimen propio y especial del art. 16 de la ley n° 24.769. En el caso, a diferencia de estos regímenes, la reparación integral del perjuicio abarca incluso el plus derivado del referido contenido social del bien jurídico protegido.

XII.- Que, por último, si bien en el supuesto de conciliación (art. 59 inc. 6° del CP) el acuerdo entre las partes es en principio vinculante (art. 34 del Código Procesal Penal Federal), en el caso de reparación integral del perjuicio la falta de conformidad del sujeto pasivo del delito no vincula al Tribunal, quedando el respectivo control bajo su prudente arbitrio (arg. Preámbulo de la Constitución Nacional y arts. 2, 8, 12 y 22 del citado texto procesal y doctrina de la CFCP in re: “Demarco Fabián Humberto”, sala IV, 13/12/21)

XIII.- Que, en función de todo ello, habiendo sido reparado íntegramente el perjuicio emergente del hecho vigente por el cual el nombrado ESMEDE ha sido requerido a juicio, cabe decretar extinguida la acción penal respectiva (art. 59 inc. 6° del CP) y proceder en su consecuencia.

Por lo expuesto, oídas las partes, arts. 336-1, 337 y sgtes. y 530 del CPP,

SE RESUELVE:

I.- DECLARAR extinguida por reparación integral del perjuicio la acción penal emergente del hecho actual por el que **Juan Osvaldo ESMEDE**, cuyas demás condiciones personales





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2
CPE 832/2015/TO1/4

obran en autos, hubo sido requerido a juicio - omisión en el mes de diciembre de 2012 por parte de la firma “Vida Verde SRL.” de no abonar los aportes previsionales respectivos retenidos- y, en su consecuencia, **SOBRESEER TOTALMENTE** en la causa y respecto al nombrado. Sin costas.

II.- TENER PRESENTE la reserva formulada por la querella AFIP/DGI.

Regístrese y notifíquese.-

FDO: DR. LUIS GUSTAVO LOSADA (JUEZ DE CÁMARA)
ANTE MI, DRA. MARÍA ALEJANDRA SMITH (SECRETARIA DE CÁMARA).

En la misma fecha se cursaron notificaciones electrónicas a las partes.
Conste.-



